



**Pronunciamiento del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, ante la Resolución de la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro, en relación al caso del Segundo Magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil de la Primera Sección del Centro, licenciado Eduardo Jaime Escalante Díaz, por atribuírsele el delito de Agresión Sexual en perjuicio a una niña de 10 años de edad**

En mi calidad de Procurador, ante la resolución de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que resolvió sobre los hechos atribuidos por la Fiscalía General de la República (FGR) al Magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, quien el pasado 19 de febrero del año 2019, fue acusado de agredir sexualmente a una niña de diez años. Expreso lo siguiente:

Que de acuerdo al mandato constitucional que me ha sido conferido, a efecto de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de la población salvadoreña. En ese sentido, deseo pronunciarme una vez más sobre las obligaciones del Estado de El Salvador en cuanto a respetar, proteger y garantizar a todas las niñas, adolescentes, y mujeres, una vida libre de violencia y discriminación, de conformidad a los estándares reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y otros instrumentos internacionales que son ley de la República.

Durante mi gestión, he instruido trabajar para erradicar cualquier forma de maltrato y/o abuso hacia la niñez, incidiendo para articular esfuerzos y superar prácticas de abuso de poder que afectan directamente la integridad física y emocional de las niñas, niños y adolescentes.

La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres tiene su asidero en la existencia de una estructura androcéntrica y misógina que reproduce estereotipos sexistas; lo cual es un hecho discriminatorio y, por tanto, una grave violación a los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres; y por ello estoy en contra de cualquier situación y acción de maltrato y abuso realizado a una niña, niño o adolescente, sin importar la condición social.

Lamento que en nuestro país las niñas, niños y adolescentes sigan siendo víctimas de trata, homicidios, suicidios, lesiones, desapariciones, violaciones, agresiones sexuales, privaciones de libertad, mutilaciones, desamparo, maltrato, entre otras abominables acciones que les niegan sus elementales derechos humanos. *“Que el día 31 de octubre del corriente año, en el cumplimiento de mi mandato Constitucional, manifesté mi preocupación que un funcionario judicial exprese que el tocamiento a una niña no sea considerado como delito y que esta Procuraduría estará vigilante del respeto y la garantía de los Derechos Humanos, de toda niña víctima de delito, en concordancia con los instrumentos protectores de los derechos de la niñez, adolescencia y de las mujeres”(1). Posición que ratifique El 1 de noviembre del presente año, en una entrevista durante el acto de “presentación de respeto a las víctimas de muerte y desaparición forzosa en el contexto del conflicto armado, realizado en el Monumento a la Memoria y la Verdad”, en el Parque Cuscatlán” (2).*



De igual manera en fechas tres y cuatro de este mes, manifesté, mediante publicaciones en redes sociales que, *todos los funcionarios y funcionarias estamos obligados a garantizar los derechos de la niñez; las niñas deben crecer y desarrollarse en ambientes sanos; nadie debe tocar a una niña o niño*. Con el hashtag #TOCARNIÑASSÍEDELITO.

De acuerdo a información de la Fiscalía General de la República, de los casos registrados por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, el 93.02% corresponden a niñas, adolescentes y mujeres; la misma situación se presenta en los casos de agresiones sexuales, pues de 991 casos registrados, el 80.93% ocurrió en niñas, adolescentes y mujeres.

Cabe mencionar que, en el año 2018, el Ministerio de Salud Pública registró 665 inscripciones prenatales de niñas y adolescentes de 10 y 14 años; de igual manera se ha identificado que otra forma de violencia física y sexual, son las uniones tempranas, señalándose que 17,746 niñas y adolescentes entre 12 y 17 años viven en dicha condición (3).

Convencido que debe de existir el pleno cumplimiento de la norma jurídica encaminada a la garantía de derechos de la niñez y, principalmente al cumplimiento del interés superior de dicha población, por parte de las instituciones administrativas y judiciales, aunado al respeto del derecho de las Mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación, en todas las etapas de su vida, es importante que se judicialicen todos los casos de violencia sexual, en aras de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, en donde imperen las reglas del debido proceso, el enfoque de género, y, en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, el interés superior de este grupo poblacional.

Es cuestionable que en la sentencia se enfoquen los hechos denunciados sin la perspectiva interseccional, que permita visibilizar las diferencias entre la niña y el supuesto agresor, ya que se afirma en la sentencia que el ánimo lúbrico no podía satisfacerse en las condiciones en las que se dio el hecho, escudándose en la tradicional denominación de estos delitos como de alcoba, de tal manera que-según lo expuesto- el hecho de que los tocamientos hayan sucedido en la vía pública, a una hora iluminada, desacreditan que éstos pudieran tener como “fin perseguido por el sujeto activo, que es la satisfacción”(4), llama la atención que si ese no era el fin, ¿cuál sí lo era?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre la naturaleza discriminatoria de los estereotipos de género en las investigaciones conducidas por los entes estatales. En esa línea, expresó que: “La Corte ya ha señalado cómo justificar la violencia contra la mujer y, de alguna manera, atribuirles responsabilidad en virtud de su comportamiento es un estereotipo de género reprochable que muestra un criterio discriminatorio contra la mujer por el solo hecho de ser mujer.”

1- @PDDH EL SALVADOR, de fecha 31 de octubre de 2019.

2- @PDDH EL SALVADOR, de fecha uno de noviembre de 2019.

3- <http://www.conna.gob.sv/>

4- Ver: Sentencia de la Audiencia Preliminar, de la Cámara Primera de lo Penal, de la Primera Sección del Centro, pronunciado en el expediente referencia 75-Antej.-2019, párrafo 2.19.



De lo anterior se desprende que el Estado debe dirigir las investigaciones desde una perspectiva de género, a saber: a través de actuaciones alejadas de aquellas que pretendan justificar la conducta de los agresores, y en vez, busquen culpabilizar a la víctima. Siento afirmar que lo anterior es lo que proyecta la lectura de la sentencia en comento, que no abona a generar las condiciones para que la persona afectada se sienta protegida por el sistema.

Lamento, de sobremanera, que, la decisión judicial publicada, genere una conmoción social de la envergadura mostrada por diferentes instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y otros organismos internacionales. Es especialmente preocupante que la postura adoptada por los Magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro envíe un mensaje de desesperanza a la niñez, puesto que su lectura desalienta la denuncia y normaliza que cualquier tipo de vulneración hacia la niñez deba mantenerse en secreto por las víctimas y sus familiares, analizarse en apego al principio de legalidad, considerando éste, basado en la normativa penal nacional vigente, y no en respeto y ejercicio del control convencional.

A 30 años de la conmemoración de la Convención sobre los Derechos del Niño, la resolución dictada por la referida Cámara evidencia que a pesar que se avanzó en la regulación de normativas para la garantía de derechos y especialmente el Derecho al Debido Proceso, al promulgarse la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que en su artículo 52 relaciona que, en cualquier procedimiento, judicial o administrativo, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al debido proceso, en los términos consagrados en la Constitución de la República, especialmente en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

Condeno enérgicamente cualquier acto constitutivo de violencia de género contra las niñas, adolescentes y mujeres, particularmente en este mes en que se conmemora el Día Internacional y Nacional de la No Violencia contra las Mujeres, e incito a las instituciones del Estado a garantizar sus derechos a una vida libre de violencia y discriminación, de acceso a la justicia, garantía de la debida diligencia; de conformidad con los parámetros nacionales e internacionales de Derechos Humanos. Por mi parte, reitero mi compromiso de mantenerme vigilante de las actuaciones de las diferentes instituciones, dentro de mis atribuciones constitucionales, para asegurar que prevalezca la justicia y el interés superior de la niñez.

Por lo tanto, con base en las atribuciones relacionadas en el artículo 194 romano I, ordinales 1°, 3°, 7° y 11° de la Constitución de la República, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, RECOMIENDO:



1- Al Estado salvadoreño a cumplir la “Observación 5 del Comité de los Derechos del Niño, sobre la insuficiente aplicación de la LEPINA, y en particular del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia, en el que se hace referencia al Estado Parte, que asigne los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para su aplicación y revise las disposiciones sobre los procedimientos administrativos y judiciales para garantizar el acceso y protección a la justicia de los niños y niñas a los servicios de protección y a la justicia”.

2- A la Fiscalía General de la República para que de acuerdo a su mandato constitucional interponga el respectivo recurso de apelación, para asegurar una resolución con enfoque de derechos humanos de la niñez y adolescencia, de género y victimológico; aplicando las leyes, sin importar la procedencia del imputado, garantizando la aplicación de la Política de Persecución Penal en Materia de Violencia contra las Mujeres.

3- Al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA, para que desde su competencia continúe ejerciendo irrestrictamente la plena vigilancia de las distintas políticas y acciones de omisión en las que se hubiesen incurrido y emitir las recomendaciones pertinentes.

Exhorto, a la sociedad civil, para que rompa paradigmas, basados en el adulto-centrismo, de manera que se exija el cumplimiento de las normas regulatorias por parte de las instituciones judiciales. Reafirmo mi compromiso de velar por el respeto irrestricto a los derechos de las niñas a una vida libre de violencia y discriminación, acceso a la justicia, y reparación integral.

San Salvador, 7 de noviembre de 2019

**José Apolonio Tobar Serrano**  
**Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos**